



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 14 de mayo de 2026

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Punta Iglesia S.A. c/ AFIP DGI s/ impugnación de acto administrativo”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que los antecedentes y circunstancias de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los puntos I y II del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, al que corresponde remitir, en este aspecto, por razones de brevedad.

2º) Que los agravios planteados por la Administración Federal de Ingresos Públicos relacionados con la improcedencia de la vía procesal escogida por la contribuyente para impugnar las resoluciones 141/09 (DI RMDO) y 503/06 (DV RRMP), encuentran adecuada respuesta en lo resuelto en Fallos: [333:161](#) (“Compañía de Circuitos Cerrados”), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir, oportunidad en la que esta Corte descartó que la vía establecida en el art. 23, inc. a, de la ley 19.549 resulte apta para impugnar determinaciones de impuestos y sus accesorios debido a que la ley 11.683 contiene una regulación específica de los medios recursivos pertinentes, lo que excluye la aplicación a su respecto de la legislación que regula los procedimientos administrativos, pues ella sólo está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en el título I de la ley 11.683 (confr. art. 116).

3º) Que lo establecido en el considerando anterior torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios propuestos ante esta instancia.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Con costas. Notifíquese, devuélvanse los autos principales y remítase la queja.



FMP 41049213/2010/1/RH1  
Punta Iglesia S.A. c/ AFIP DGI s/  
impugnación de acto administrativo.

## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Recurso de queja interpuesto por: **la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva**, representada por la **Dra. María Florencia Camussi**.

Tribunal de origen: **Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Juzgado Federal n° 4 de Mar del Plata**.

RECURSO QUEJA N° 1 - PUNTA IGLESIA SA C/ AFIP DGI s/ impugnación de acto administrativo.



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

MONTI  
Laura  
Mercedes

Firmado  
digitalmente por  
MONTI Laura  
Mercedes  
Fecha: 2023.03.23  
09:36:02 -03'00'

S u p r e m a C o r t e :

-I-

De las actuaciones digitales obrantes en el sistema de consulta de causas web del Poder Judicial de la Nación, surge que el 13 de octubre de 2020, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmó la sentencia de la anterior instancia.

Dicho pronunciamiento, a su turno, hizo lugar a la demanda contenciosa interpuesta en estas actuaciones y dejó sin efecto la resolución (DI RMDP) 141/09, que había rechazado el recurso de reconsideración presentado contra la resolución (DV RRMP) 503/06, que había determinado de oficio el impuesto a la ganancia mínima presunta (en adelante, IGMP) correspondiente al ejercicio fiscal 2002 y aplicado multa.

Como fundamento, en primer término, la cámara desestimó el agravio formulado por el accionado con relación a la improcedencia de la vía judicial elegida por la actora para impugnar la resolución (DV RRMP) 503/06 y su confirmatoria. Destacó que ellas constituían actos administrativos de alcance individual y revestían el carácter de definitivos, en atención a que se habían agotado previamente las instancias recursivas a su respecto (cfr. art. 23, de la ley 19.549).

También resaltó que el juez tiene la potestad para disponer el tipo de proceso aplicable a cada contienda, siempre que se resguarden las reglas básicas del debido proceso y la defensa en juicio (arg. arts. 18 y 75 inc. 22, de la

Constitución Nacional), y destacó que en el caso no se examinaba la disconformidad de un contribuyente con respecto a *"una simple determinación de oficio de tributos, sino de la impugnación a un acto administrativo presuntamente dictado en violación a una manda cautelar judicial"*.

Señaló que, al momento de dictarse aquellas resoluciones administrativas, se encontraba vigente una medida cautelar que *"imponía a la AFIP-DGI suspender la exigibilidad, respecto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, de los saldos de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2000/2001, como así también, los anticipos en cuestión por el período 2002, y ordenándole que se abstenga de iniciar acciones legales tendientes al ingreso de los mismos, o de haberlas iniciado, las suspenda hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión"*.

En tales condiciones, consideró que las resoluciones aquí examinadas se *"encontraban suspendidas vigente la cautelar"*, y, por tales motivos, sostuvo que la determinación de la deuda correspondiente al período fiscal 2002, y la consiguiente intimación al pago, resultaba improcedente.

## -II-

Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional interpuso el recurso extraordinario (fs. 146/160, de las actuaciones digitales), que al ser denegado por el *a quo*, dio origen a la presente queja.

La recurrente, por un lado, cuestiona la idoneidad de la vía procesal para tramitar estas actuaciones, porque considera que la parte actora se apartó del régimen que la ley

RECURSO QUEJA N° 1 - PUNTA IGLESIA SA C/ AFIP DGI s/ impugnación de acto administrativo.



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

11.683 establece para impugnar judicialmente los actos determinativos de oficio.

Destaca que la actora interpuso el recurso de reconsideración previsto en el art. 76, inc. a), de la ley 11.683, contra la resolución (DV RRMP) 503/06. Agrega que, para cuestionar judicialmente la determinación de oficio del impuesto una vez rechazado el mencionado recurso, la interesada debió pagar previamente el tributo e iniciar la acción de repetición, en los términos del art. 81 de dicho régimen.

Por tal motivo, refiere que el *a quo* desvirtuó la facultad de encauzar el proceso, al permitir que se inicien acciones en violación al procedimiento de impugnación que establece la ley 11.683. Precisa que *"la recta interpretación de la ley aplicable acarrea ... la falta de acción de la actora para introducir la pretensión invocada, pues para ello debió haber oblado el tributo previamente"*.

Agrega que tales extremos fueron examinados por V.E. en Fallos: 333:161 *"Compañía de Circuitos Cerrados c/ Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General Impositiva"*, sentencia del 9 de marzo de 2010, y que el criterio allí propiciado había sido ratificado por esa Corte en las causas *"AFIP-DGI c/ Marybe S.R.L. s/ ejecución fiscal A.F.I.P."* y *"AFIP c/ Lage S.A. s/ ejecución fiscal - A.F.I.P."*, sentencias del 24 de abril de 2018.

Al respecto, resalta que los tribunales inferiores tienen el deber moral de acatar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 307:1094, entre otros), y que

el apartamiento de aquellos precedentes torna a la sentencia en arbitraria.

En otro orden de agravios, la recurrente sostiene que el a quo interpretó la medida cautelar dictada en la causa FMP 81.041.345/2002 con un alcance más amplio que el que concretamente le había sido acordado.

Recuerda que aquella resolución únicamente alcanza al IGMP de los períodos fiscales 2000 y 2001, y a los anticipos de ese tributo correspondientes al ejercicio 2002. Por ende, afirma que aquella manda no vedaba la exigibilidad de la obligación de pago del IGMP del período fiscal 2002, sino tan solo a sus anticipos.

Al respecto, explica que esos pagos a cuenta constituyen obligaciones tributarias autónomas e independientes del impuesto. Por ello, sostiene que resulta arbitrario entender que la prohibición cautelar de exigir los anticipos del IGMP del periodo 2002 conlleve, siquiera implícitamente, la prohibición de determinar el impuesto por ese ejercicio.

Además, resaltó que la medida cautelar únicamente impedía exigir e *"iniciar acciones legales tendientes al ingreso"* de los conceptos impositivos indicados, pero *"nunca impidió realizar las actuaciones administrativas tendientes a determinar la materia imponible y cuantificar el tributo adeudado"*.

-III-

En primer término, pienso que el agravio del Fisco Nacional respecto de la vía procesal elegida por la demandante para impugnar la resolución (DV RRMP) 503/06 y su confirmatoria

RECURSO QUEJA N° 1 - PUNTA IGLESIA SA C/ AFIP DGI s/ impugnación de acto administrativo.



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

es inadmisibile, toda vez que remite al examen de cuestiones procesales, cuya solución se encuentra reservada a los jueces de grado, y excluida de la vía extraordinaria (Fallos: 315:380:325:1731, entre muchos otros).

-IV-

Sin perjuicio de ello, en lo atinente al fondo del debate, opino que le asiste la razón a la parte demandada, debido a que -al rechazar el recurso del Fisco Nacional- el *a quo* no explicó de manera concreta por qué consideró que la facultad para determinar de oficio el IGMP del periodo fiscal 2002 se encontraba alcanzada por la medida cautelar dictada el 15 de octubre de 2004 en la causa FMP 81.041.345/2002, con trámite ante el mismo juzgado y secretaría del fuero federal de la ciudad de Mar del Plata.

Al respecto, de la propia sentencia recurrida surge que la *"disposición cautelar en cuestión imponía a la AFIP-DGI suspender la exigibilidad, respecto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, de los saldos de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2000/2001, como así también, los anticipos en cuestión por el período 2002, y ordenándole que se abstenga de iniciar acciones legales tendientes al ingreso de los mismos, o de haberlas iniciado, las suspenda hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión"* (subrayado, añadido).

En tal sentido, advierto que de los términos referidos no surge que se hubieran cautelarmente suspendido o inhibido las



facultades del Fisco Nacional para *determinar* el IGMP del período fiscal 2002.

Al contrario, la resolución cautelar únicamente suspendió la exigibilidad de conceptos concretos, es decir, de "los saldos de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2000/2001, como así también, los anticipos en cuestión por el período 2002" (subrayado, agregado). Del párrafo transcripto se desprende, sin hesitación, que, con respecto al período fiscal 2002, solamente se suspendió la exigibilidad de los anticipos de ese ejercicio.

Así las cosas, entiendo que asiste razón a la recurrente en punto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto, en tanto la Cámara omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas por su parte y relevantes para la correcta solución del pleito, sin dar razones valederas para ello, con desconocimiento de las constancias de la causa (doctrina de Fallos: 319:1609; 320:1663 y 326:697).

-V-

Por lo expuesto, considero que corresponde declarar admisibles la queja y parcialmente el recurso extraordinario que interpuso Fisco Nacional, revocar la sentencia apelada y devolver las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva conforme a lo aquí dictaminado.

Buenos Aires,                      de marzo de 2023.